

COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

El Gobierno responde al informe del Auditor Principal del ejercicio 2018/2019 (Día 5)

Gibraltar, 2 de octubre de 2025

En el quinto día del debate parlamentario sobre el Informe correspondiente al ejercicio 2018/2019 del anterior Auditor Principal, el Ministro Principal continuó su análisis detallado, centrándose en dos áreas principales: los retrasos en la publicación del Informe y las críticas relativas a las empresas públicas.

Retrasos en la publicación del Informe

El Ministro Principal demostró con pruebas que el retraso sin precedentes en la publicación de las cuentas de 2018/2019, entre cuya preparación y presentación al Parlamento pasaron casi cuatro años, fue el resultado directo de la decisión unilateral del anterior Auditor Principal de renunciar a la tradicional práctica de aceptar borradores de cuentas.

Los anteriores Auditores Principales habían aceptado copias anticipadas, lo que les permitió completar las auditorías con prontitud. En cambio, el anterior Auditor Principal insistía en que solo podían aceptarse las cuentas finalizadas y firmadas, una interpretación restrictiva y novedosa de la ley que inevitablemente ralentizaba el proceso.

El Ministro Principal confirmó que esta elección, única y exclusivamente, provocó los retrasos. El Gobierno no tuvo nada que ver, y las insinuaciones de la oposición de que el retraso se fraguó para evitar el control eran falsas.

El Ministro Principal destacó la cronología histórica de las presentaciones de los informes de auditoría para mostrar claramente dónde residía la responsabilidad de los retrasos. Con el anterior Auditor Principal, Jimmy Posso, los informes correspondientes a los años 2007 a 2015 se completaron sistemáticamente en un plazo de entre 12 y 18 meses desde el cierre del ejercicio financiero, y algunos se presentaron en cuestión de semanas o incluso días después de la pertinente Ley de Presupuesto Adicional (Supplementary Appropriation Act). En cambio, con su sucesor 2018/2019 se retrasaron durante años, y el de 2018/2019 no llegó al Gobierno hasta julio de 2025. Según el Ministro Principal, este hecho no tiene precedentes y demuestra sin lugar a dudas que los retrasos se deben al enfoque restrictivo del propio Auditor y no al Gobierno.

Calendario de retrasos

	Ejercicio fiscal	Fin ejercicio (31 mar)	Fecha de presentación	Auditor Principal	Retraso (vs fin ejercicio 31 mar)
1	2007-08	31 mar 2008	20 mar 2009	J. C. Posso	0 años 11 meses
2	2008-09	31 mar 2009	18 mar 2010	J. C. Posso	0 años 11 meses
3	2009-10	31 mar 2010	11 mar 2011	J. C. Posso	0 años 11 meses
4	2010-11	31 mar 2011	29 mar 2012	J. C. Posso	0 años 11 meses

COMUNICADO

5	2011-12	31 mar 2012	5 jul 2013	J. C. Posso	1 año 3 meses
6	2012-13	31 mar 2013	11 jul 2014	J. C. Posso	1 año 3 meses
7	2013-14	31 mar 2014	26 ago 2015	J. C. Posso	1 año 4 meses
8	2014-15	31 mar 2015	26 sep 2016	J. C. Posso	1 año 5 meses
9	2015-16	31 mar 2016	30 ene 2019	A. R. Sacramento	2 años 9 meses
10	2016-17	31 mar 2017	21 dic 2023	A. R. Sacramento	6 años 8 meses
11	2017-18	31 mar 2018	21 dic 2023	A. R. Sacramento	5 años 8 meses
12	2018-19	31 mar 2019	1 jul 2025	A. R. Sacramento	6 años 3 meses

Obstrucción por parte de la Administración

El Ministro Principal también desmontó la afirmación de que altos funcionarios públicos habían obstruido el proceso de auditoría. Los registros muestran que los funcionarios respondieron con prontitud, a menudo en cuestión de días, y dieron a la oficina de auditoría pleno acceso a los asientos contables originales. Los plazos de respuesta más largos se debieron a factores legítimos, como la participación de varios organismos, la recuperación de documentos archivados o la programación parlamentaria. Los funcionarios actuaron con profesionalidad, imparcialidad y dedicación al servicio público.

Las acusaciones del Informe dañan injustamente la reputación de los funcionarios, que no pueden responder en el debate político. El Ministro Principal dejó claro que los funcionarios de Gibraltar no se confabulan, ni se confabularían nunca, para evitar la supervisión. Lejos de obstaculizar las auditorías, se esforzaron por facilitarlas.

Futuras reformas

Para reforzar aún más los procesos, el Gobierno confirmó que se introducirá una función de enlace de auditoría intergubernamental, plazos a nivel de servicio y un sistema compartido de seguimiento. Estas reformas demuestran un compromiso con las mejores prácticas, la transparencia y la eficiencia.

Empresas públicas

En cuanto a las empresas públicas, el Ministro Principal dejó claro que el Auditor Principal se había extralimitado en sus funciones al criticar las disposiciones vigentes en materia de auditoría y pedir una reforma legislativa.

Según la Constitución, la función del Auditor Principal se limita a auditar las cuentas públicas de Gibraltar y los organismos del Gobierno. No le corresponde auditar las empresas públicas, que son entidades jurídicas independientes en virtud de la Ley de Sociedades (Companies Act) de 2014. Por ley, sus auditorías las realizan empresas externas de renombre sujetas a una estricta reglamentación y a normas internacionales.

La sugerencia del anterior Auditor Principal de que estas auditorías eran insuficientes no sólo era errónea, sino indebida. Corresponde al Parlamento, y no a un auditor, decidir si se modifica el marco estatutario. El intento de ampliar su mandato supuso una clásica extralimitación *ultra vires*.

Consejo independiente

Un asesoramiento jurídico independiente lo confirmó. [El asesor legal Jonathan] Fisher advirtió que las disposiciones existentes son adecuadas, que todas las transacciones ya pasan por los

COMUNICADO

sistemas de contabilidad del Gobierno a los que el Auditor tenía pleno acceso, y que el anterior Auditor se había equivocado. Concluyó que debería retirarse la sección del informe que trata de las empresas públicas.

El Ministro Principal señaló: “Un Auditor Principal no diseña leyes. No decide cuáles son sus funciones. Al pretender hacerlo, el Informe se adentró en territorio reservado al Parlamento, y eso es incorrecto e ilegal”.

Conclusión

El Gobierno dejó claro que los hechos son indiscutibles:

- El retraso en la publicación del Informe de 2018/2019 se debió únicamente a la decisión restrictiva del anterior Auditor Principal de dejar de aceptar borradores de cuentas.
- Los funcionarios cooperaron plenamente y actuaron con integridad, contrariamente a lo que se insinuaba en el Informe.
- Las críticas a las empresas públicas fueron *ultra vires*, contenían carga política y eran profesionalmente insostenibles.

El Gobierno confirmó que la moción presentada ante la Cámara se modificará para rechazar ambas secciones del Informe, garantizando que el Parlamento defienda la equidad, la legalidad y la integridad de las instituciones de Gibraltar.

Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con Servicio de Información de Gibraltar

Miguel Vermehren, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166

Sandra Balvín, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757

Eva Reyes Borrego, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498

Álvaro López, alvaro@infogibraltar.com, Tel 662 386 833

Nacho Arranz, nacho@infogibraltar.com, Tel 674 283 002

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press

Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)

PRESS RELEASE

No: 714/2025

Date: 2nd October 2025

Government Response to Principal Auditor's 2018/2019 Report Day 5

On the fifth day of the parliamentary debate on the former Principal Auditor's 2018/2019 Report, the Chief Minister continued his detailed analysis, focusing on two principal areas: the delays in the publication of the Report and the criticisms concerning government-owned companies.

Delays in the Publication of the Report

The Chief Minister demonstrated with evidence that the unprecedented delay in publishing the 2018/2019 accounts, almost four years between their preparation and submission to Parliament, was the direct result of the former Principal Auditor's unilateral decision to abandon the long-standing practice of accepting draft accounts.

Previous Principal Auditors had accepted advance copies, which enabled them to complete audits promptly. By contrast, the former Principal Auditor insisted that only finalised and signed accounts could be accepted, a restrictive and novel interpretation of the law that inevitably slowed the process.

The Chief Minister confirmed that this choice, and this choice alone, caused the delays. The Government had no role in it, and suggestions by the Opposition that the delay was engineered to avoid scrutiny were false.

The Chief Minister highlighted the historical timeline of audit report submissions to show clearly where responsibility for delays lay. Under former Principal Auditor Jimmy Posso, reports for the years 2007 to 2015 were consistently completed within 12 to 18 months of the financial year-end, with some submitted within weeks or even days of the relevant Supplementary Appropriation Act. By contrast, under the immediately former Principal Auditor, reports for 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 and 2018/2019 were delayed for years, with the 2018/2019 report not reaching Government until July 2025. This, the Chief Minister said, was unprecedented and demonstrated beyond doubt that the delays were caused by the Auditor's own restrictive approach, not by the Government.



Timeline of Delays

	Financial Year	Year End (31 Mar)	Submission Date	Principal Auditor	Delay (31 Mar FY)
1	2007-08	31 Mar 2008	20 Mar 2009	J. C. Posso	0 years 11 months
2	2008-09	31 Mar 2009	18 Mar 2010	J. C. Posso	0 years 11 months
3	2009-10	31 Mar 2010	11 Mar 2011	J. C. Posso	0 years 11 months
4	2010-11	31 Mar 2011	29 Mar 2012	J. C. Posso	0 years 11 months
5	2011-12	31 Mar 2012	5 Jul 2013	J. C. Posso	1 year 3 months
6	2012-13	31 Mar 2013	11 Jul 2014	J. C. Posso	1 year 3 months
7	2013-14	31 Mar 2014	26 Aug 2015	J. C. Posso	1 year 4 months
8	2014-15	31 Mar 2015	26 Sep 2016	J. C. Posso	1 year 5 months
9	2015-16	31 Mar 2016	30 Jan 2019	A. R. Sacramento	2 years 9 months
10	2016-17	31 Mar 2017	21 Dec 2023	A. R. Sacramento	6 years 8 months
11	2017-18	31 Mar 2018	21 Dec 2023	A. R. Sacramento	5 years 8 months
12	2018-19	31 Mar 2019	01 Jul 2025	A. R. Sacramento	6 years 3 months

Civil Service Obstruction

The Chief Minister also dismantled the claim that senior public servants had obstructed the audit process. Records show that officials replied promptly, often within days, and gave the audit office full access to primary records. Any longer response times were the result of legitimate factors such as multi-agency input, retrieval of archived records, or parliamentary scheduling. Officials acted with professionalism, fairness, and dedication to public service.

The accusations in the Report unfairly damaged the reputations of civil servants who cannot answer back in political debate. The Chief Minister made clear that Gibraltar's public servants do not, and would never, collude to avoid scrutiny. Far from obstructing audits, they went out of their way to facilitate them.

Future Reforms

To further strengthen processes, the Government confirmed that a cross-government audit liaison function, service-level timelines, and a shared tracker will be introduced. These reforms demonstrate a commitment to best practice, transparency, and efficiency.



Government-Owned Companies

Turning to government-owned companies, the Chief Minister was clear that the Principal Auditor had exceeded his remit by criticising existing audit arrangements and calling for legislative reform.

Under the Constitution, the Principal Auditor's role is limited to auditing the public accounts of Gibraltar and Government offices. It does not extend to government-owned companies, which are independent legal entities under the Companies Act 2014. By law, their audits are conducted by reputable external firms subject to strict regulation and international standards.

The former Principal Auditor's suggestion that these audits were insufficient was not only wrong but unlawful. It is for Parliament, not an auditor, to decide whether to change the statutory framework. The attempt to expand his mandate amounted to a classic *ultra vires* overreach.

Independent Council

Independent legal advice confirmed this. Mr Fisher KC advised that the existing arrangements are adequate, that all transactions already pass through Government accounting systems to which the Auditor had full access, and that the former Auditor had misdirected himself. He concluded that the section of the Report dealing with government companies should be withdrawn.

The Chief Minister stated: "A Principal Auditor does not design laws. He does not decide his own remit. By purporting to do so, the Report stepped into territory reserved for Parliament, and that is both wrong and unlawful."

Conclusion

The Government made clear that the facts are unarguable:

- The delay in publishing the 2018/2019 Report was entirely caused by the former Principal Auditor's restrictive decision to stop accepting draft accounts.
- Civil servants fully cooperated and acted with integrity, contrary to insinuations in the Report.
- The criticisms on government-owned companies were *ultra vires*, politically charged, and professionally unsustainable.

The Government confirmed that the motion before the House will be amended to reject both of these sections of the Report, ensuring Parliament upholds fairness, legality, and the integrity of Gibraltar's institutions.

ENDS